

Distr.  
GENERAL

CCPR/C/SR.1150  
9 de diciembre de 1992

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

COMITE DE DERECHOS HUMANOS

45º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 1150a. SESION

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,  
el lunes 13 de julio de 1992, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. POCAR

SUMARIO

Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del  
artículo 40 del Pacto

Informe inicial de la República de Corea

---

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse a un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.

GE.92-16360/8639f (S)

Se declara abierta la sesión a las 15.15 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL  
ARTICULO 40 DEL PACTO

Informe inicial de la República de Corea (CCPR/C/68/Add.1)

1. Por invitación del Presidente, los Sres. Soo Gil Park, Bong Joo Moon, Dal Ho Chung y Kook Hyun Yoo (República de Corea) se incorporan a la mesa del Comité.

2. El Sr. Soo Gil PARK (República de Corea), al presentar el informe inicial de la República de Corea (CCPR/C/68/Add.1), afirma que su país se adhirió en 1990 a los dos Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, con el fin de consolidar la protección de los derechos humanos en Corea y sumarse al esfuerzo internacional para promoverlos en todo el mundo. El examen de su informe inicial constituye un acontecimiento importante, y espera que permitirá entablar un diálogo constructivo sobre la mejor manera de que la República pueda cumplir sus compromisos adquiridos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este hecho ya ha merecido la atención de los medios de comunicación y de varios grupos de derechos humanos de su país y alentará el firme propósito de su Gobierno de promover los derechos humanos del pueblo coreano.

3. Se ha hecho todo lo necesario para que la estructura y el contenido del informe se conformen a las directrices del Comité, y para incluir toda la información que permita proporcionar el cuadro más completo de la situación de la protección de los derechos humanos en la República de Corea. Puesto que las leyes de la República se basan en la ley escrita, este informe resalta los aspectos legales e institucionales de la cuestión, pero se citan además las sentencias de la Corte Constitucional y de otros tribunales, así como las oportunas medidas administrativas. Teniendo en cuenta que se han producido importantes avances en la protección de los derechos humanos desde la toma de posesión del actual Gobierno, a principios de 1988, el informe se centra en los acontecimientos ocurridos desde entonces.

4. Tras la reforma constitucional del 29 de octubre de 1987, las medidas institucionales han sido reforzadas para incorporar principios genuinamente democráticos, y para promover la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El pueblo coreano ve en la Constitución, que se basa en la Declaración para la Democracia del 29 de junio de 1987, un viraje decisivo en la lucha por la democracia. Instaura la elección del Presidente de la República por sufragio popular directo, en lugar del sufragio indirecto existente hasta ese momento, ampliando de esta forma el alcance de la participación popular. También refuerza el poder de la Asamblea Nacional frente a la administración, al restablecer, por ejemplo, su facultad de revisar los actos de esta última. En el área de la justicia, ha reforzado la independencia del poder judicial, mejorando el sistema de nombramiento de los jueces. También creó la Corte Constitucional, que, además de revisar la constitucionalidad de las leyes a petición de los tribunales, pronuncia sentencias basadas en las reclamaciones individuales que tratan de lograr una reparación frente a las infracciones contra los derechos humanos cometidas por el Estado. Desde la introducción del sistema en septiembre de 1988 se han

concedido reparaciones en más de 30 casos de infracciones -lo cual representa una significativa mejora en la situación de los derechos humanos.

Las disposiciones constitucionales que tratan de los derechos humanos y de las libertades fundamentales también han sido objeto de una reforma para promover la protección de esas libertades y esos derechos. Por ejemplo, han quedado recogidos en la Constitución los rigurosos procedimientos que hay que seguir en caso de arresto o detención, y se han reforzado los derechos de los sospechosos y de los acusados de actos delictivos.

5. Para aplicar estas disposiciones constitucionales, se han introducido enmiendas en las leyes y reglamentos correspondientes, y se han perfeccionado los procedimientos correspondientes. El Gobierno ha realizado además mejoras en la administración penitenciaria y ha creado programas de ayuda legal. De acuerdo con el espíritu del artículo 10 de la Constitución, que proclama el valor y la dignidad de los ciudadanos, y lleva implícito el derecho a la vida, tal y como se proclama en el artículo 6 del Pacto, el Gobierno ha reformado la Ley penal especial para abolir la pena de muerte en 15 tipos de delitos. El Gobierno ha emprendido también un examen cuyo fin es reducir aún más la aplicación de esta pena, mediante unas enmiendas que se espera serán promulgadas a finales del presente año. También se ha limitado la aplicación de la polémica Ley de seguridad nacional y de la Ley relativa al derecho de reunión y manifestación, con el fin de eliminar las malas interpretaciones y los abusos.

6. La autonomía local, que no se aplicó más que durante un breve período de los años 60, a pesar de estar recogida en la Constitución desde el nacimiento de la República, se ha convertido en una realidad, y se han celebrado en todo el país elecciones al Consejo Legislativo en marzo y junio de 1991.

7. El pueblo de la República vive ya en una democracia, sometido al imperio de la ley y liberado por completo de los tintes autoritarios del pasado. Los derechos humanos y las libertades fundamentales están garantizados y protegidos, inclusive la libertad de prensa. La adhesión al Pacto ha representado una contribución importante a este proceso democrático. Sólo una verdadera democracia puede abrirse a la investigación pública, y debe subrayarse que la República de Corea ha realizado una declaración reconociendo la competencia del Comité de acuerdo con el artículo 41 del Pacto, y se ha adherido además al Protocolo Facultativo. Los derechos humanos de la población gozan desde entonces de la protección internacional, reforzando así la amplia protección proporcionada en el ámbito nacional por la Constitución. Se han realizado todos los esfuerzos necesarios para dar a conocer estos instrumentos internacionales, se han traducido y publicado los textos en coreano, y se ha realizado una recopilación de las actas y las principales decisiones del Comité. También se han tomado medidas para dar a conocer las disposiciones y los procedimientos establecidos en el Pacto y en la Constitución a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los ciudadanos de la República pueden enorgullecerse por el hecho de dedicar toda una semana a la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el 10 de diciembre se celebra como Día de los derechos humanos, con el fin de recordar a la población el espíritu de la Declaración Universal y de los derechos de los que se disfrutaban en una democracia. Todos los derechos recogidos por el Pacto están garantizados por la Constitución, que estipula que todos los tratados debidamente celebrados y promulgados tendrán el mismo

efecto que la legislación interna. Estos dos instrumentos forman conjuntamente el eje central de la legislación de la República sobre derechos humanos, y cabe resaltar que la Corte Constitucional ha invocado el párrafo 2 del artículo 18 en su sentencia decisiva del 1º de abril de 1991 sobre la constitucionalidad de una disposición del Código Civil. La República ha expresado tres reservas al Pacto en relación con las disposiciones específicas que entran en conflicto con la legislación nacional, es decir los párrafos 5 y 7 del artículo 14 y el artículo 22, pero éstas son de naturaleza limitada y no tratan en ningún momento de desvirtuar los derechos específicos establecidos en el Pacto; como se explica en el informe, sólo tratan de conservar las limitaciones impuestas por la correspondiente legislación nacional. Su Gobierno cree firmemente que las reservas no representan una derogación de los principios básicos consagrados por el Pacto, pero está revisando su postura para ver si se puede limitar aún más su alcance.

8. La admisión de la República de Corea en el seno de las Naciones Unidas en septiembre de 1991 ha dado mayor ímpetu a los esfuerzos de su Gobierno en favor de los derechos humanos universales, de acuerdo con la Carta y, al convertirse posteriormente en miembro de pleno derecho de la Organización Internacional del Trabajo en diciembre de 1991, la República ha secundado firmemente los esfuerzos internacionales para lograr el respeto de los derechos sindicales fundamentales. La República ha ratificado también la Convención sobre los Derechos del Niño en diciembre de 1991 y, en breve, será parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y su Protocolo, pendiente de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional. No debe concederse menos importancia a las acciones de los individuos y de los grupos, y su delegación cree que el incremento del número de casos relativos a los derechos humanos que se están llevando ante los tribunales es prueba de la confianza popular en la justa aplicación de la ley. Además, los grupos privados de derechos humanos están incrementando su actividad de vigilancia.

9. Uno de los factores que está afectando a la aplicación del Pacto es la tensa situación derivada de la división de la península de Corea. Tras su liberación del régimen colonial japonés en 1945, Corea se encontró entre dos ideologías opuestas, y la agresión de 1950 procedente del Norte trajo desgracias inenarrables al pueblo de Corea y consolidó la división del país. Desde aquella guerra, las dos partes de Corea se han enfrentado la una a la otra, tanto militar como ideológicamente, a través del paralelo 38. En consecuencia, hasta 1991, tras el final de la guerra fría, los dos bandos no consiguieron iniciar un diálogo serio y sólo entonces empezaron a buscar una vía de reunificación pacífica de la nación. En febrero de 1992 se celebró el Acuerdo sobre Reconciliación, no Agresión, Intercambio y Cooperación, que dio lugar a una serie de consultas periódicas destinadas a colmar el vacío existente entre las dos Coreas en todos los campos. Sin embargo, no se trata más que de un primer paso cauteloso, y puede entenderse que un país, que ha estado a punto de ser derrotado mediante una invasión, se sienta incapaz de bajar la guardia ante una nueva agresión. Unas fuerzas armadas que se cifran en 1,5 millones de soldados ocupan posiciones a todo lo largo del paralelo 38 y, a pesar del final de la guerra fría, el acuerdo de armisticio todavía no se ha sustituido por un acuerdo de paz. Por lo tanto, la República de Corea se ve obligada a proteger su sistema democrático liberal contra la subversión. Resulta lamentable que Corea del Norte siga manteniendo una

cláusula en el preámbulo del programa político del Partido Coreano de los Trabajadores, que goza de precedencia con respecto a su Constitución, en la que se proclama como objetivo político básico del partido el llevar a cabo la revolución popular para la liberación nacional en Corea del Sur. En otras palabras, imponer el comunismo sobre toda la península. En consecuencia, la Ley de seguridad nacional, aprobada por la República para proteger su seguridad y la integridad del sistema, todavía tiene su razón de ser. Por lo tanto, a pesar del llamamiento procedente de ciertos sectores que piden la abolición de la Ley, existe un consenso nacional en el sentido de que debe seguir aplicándose; ninguna democracia puede ser tolerante hasta el punto de permitir que las fuerzas de la revolución derroten su sistema de libertades. No obstante, cree firmemente que, cuando se firme un acuerdo de paz y se normalicen las relaciones Norte-Sur, la Ley se hará innecesaria. Mientras tanto, el Gobierno sigue decidido a eliminar cualquier violación de los derechos humanos que resulte de la aplicación de la Ley más allá de las restricciones permitidas por la Constitución y el Pacto, como demuestra la incorporación a la Ley en mayo de 1991 del contenido de una sentencia de 1990 de la Corte Constitucional que limitaba su alcance. Esta decisión proporciona definiciones más claras y más rigurosas expresiones tales como "que ponga en peligro la supervivencia y la seguridad nacional" y "que ponga en peligro el orden democrático liberal básico".

10. Como parte de su futuro programa para promover los derechos humanos, el Gobierno de su país tiene la intención de adherirse a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. También está acabando de elaborar enmiendas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para reforzar el principio de nullum crimen sine lege, e introducir medidas para una revisión más eficaz de las garantías. Como nuevo miembro de la OIT, está preparando también su adhesión a varios convenios de la OIT, y ha creado un Grupo de Trabajo para modernizar la legislación laboral nacional en el que están equitativamente representados los trabajadores, los empleadores y los expertos jurídicos. Este Grupo está estudiando también la posibilidad de una reforma de la Ley sindical que permita la existencia de varios sindicatos en un mismo centro de trabajo, lo cual está prohibido en la actualidad. De esta forma, la República seguirá esforzándose por mejorar sus instituciones y prácticas en relación con los derechos humanos y para incorporar a la vida diaria de la población el espíritu y los principios de la Constitución y del Pacto.

11. El Gobierno de su país desempeñará un papel activo en la promoción de los derechos humanos a nivel regional e internacional. Tiene grandes esperanzas puestas en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que se celebrará en junio de 1993, en la que anhela participar, ya que la República ha sido elegida para formar parte de la Comisión de Derechos Humanos a partir de 1993.

12. La delegación de su país espera que las explicaciones y declaraciones que se han proporcionado ayudarán al Comité a comprender la situación de los derechos humanos en la República de Corea y tendrá mucho gusto en contestar de la mejor forma posible a las preguntas que quieran formular los miembros del Comité.

13. El Sr. ANDO felicita a la delegación de la República de Corea por la presentación puntual de su informe, que sigue en líneas generales las directrices del Comité y que, además de recoger una serie de disposiciones legislativas proporciona una información estadística y práctica que resulta de gran utilidad. Acoge con agrado la decisión de la República de adherirse al Pacto y también al Protocolo Facultativo y de realizar la declaración prevista en el artículo 41.

14. Durante la larga historia de Corea, el Japón ha aprendido mucho de ella en las esferas cultural, religiosa y filosófica. Resulta por tanto especialmente desafortunado el que, al modernizarse, el Japón emprendiera una política agresiva que llevó a la invasión de Corea en 1905 y a la dominación colonial japonesa a partir de 1910. A la división de la península, tras su liberación al final de la segunda guerra mundial, se siguió en 1950 el estallido de la guerra de Corea. El orador desea expresar su solidaridad con el pueblo coreano en relación con esta trágica historia reciente, y expresarle personalmente su pena y disculpas por el papel que el Japón desempeñó en ella.

15. Acoge con agrado el deseo expresado por la delegación de iniciar un diálogo constructivo con el Comité como medio para resolver cualquier problema que pudiera existir en materia de derechos humanos. Con este ánimo solicitará aclaraciones sobre algunas cuestiones del informe. La primera se refiere a la declaración realizada en el párrafo 5 en el sentido de que el Pacto tiene el mismo efecto legal que las leyes nacionales. Si esto es así, ¿qué ocurre cuando se promulga nueva legislación nacional? ¿Se prevé en dicha promulgación la posibilidad de un conflicto entre la nueva legislación y el Pacto?

16. En el párrafo 29 del informe, que se refiere al artículo 2 del Pacto, se cita el artículo 11 párrafo 1 de la Constitución de la República, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo, religión o situación social. Existen no obstante otros posibles campos para la discriminación, tales como los enumerados en el artículo 2, párrafo 1 y en el artículo 26 del Pacto, incluyendo la opinión política. Desea por tanto preguntar si existe alguna diferencia entre los motivos de discriminación invocados por la Constitución y los que se recogen en el Pacto.

17. En relación con el capítulo del informe que se refiere al artículo 3 del Pacto, acoge con agrado el hecho de que, al adherirse al Pacto, la República de Corea se haya comprometido a eliminar toda discriminación contra la mujer. Sin embargo, es bien sabido que dejando de lado las medidas legislativas, en la práctica pueden darse muchos tipos de discriminación en una sociedad, como es el caso en su propio país, Japón. Por tanto, agradecería que se diera cuenta brevemente de cualquier discriminación de este tipo que pudiera existir en la práctica en la República y de cualquier medida positiva que se haya adoptado para eliminarla. A este respecto, señala la declaración realizada en el párrafo 87 d) del informe en relación con el derecho de ambos cónyuges a solicitar que se divida el patrimonio común sobre la base de la contribución que cada uno de ellos haya realizado a su formación, que parece implicar una separación de la propiedad matrimonial. Pero en la práctica, cuando dos personas conviven en matrimonio, es necesario que compartan alguna propiedad común, y en ciertas situaciones sociales la participación del marido suele ser

mayor que la de la esposa. Por tanto el Sr. Ando desearía que se diera más información sobre la situación de los bienes matrimoniales en la República de Corea y sobre cualquier medida destinada a garantizar una mayor igualdad entre los cónyuges.

18. En relación con el artículo 4 del Pacto, el informe señala (párr. 89) que el artículo 37 (2) de la Constitución establece restricciones a las libertades y los derechos en casos de emergencia. Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto establece que, incluso en casos de emergencia pública, algunos artículos del Pacto relativos a derechos básicos no pueden ser suspendidos y agradecería que se le proporcionara más información sobre las categorías específicas de derechos que no pueden ser suspendidos en virtud de la legislación de la República de Corea.

19. Otros miembros del Comité se referirán sin duda a distintos aspectos de la aplicación de la Ley de seguridad nacional. El se limitará a pedir, en relación con la parte del informe que trata de la prohibición de la tortura y de la crueldad practicadas en el ejercicio de funciones oficiales (art. 7), más información sobre los hechos que dieron lugar a la sentencia de la Corte Suprema que se menciona en el párrafo 138.

20. El párrafo 150 del informe, relativo al artículo 9 del Pacto, señala "una discrepancia entre las normas del Código de Procedimiento Penal y las prácticas de los organismos encargados de la investigación" en la cuestión de la detención. ¿Cuánto tiempo transcurre, de hecho, entre el momento en que una persona ha sido detenida y el momento en que se informa a su familia?

21. En relación con el artículo 10 sobre el tratamiento humano de los detenidos, pregunta a partir de qué edad es aplicable la legislación penal en la República de Corea. El informe (párrs. 167 y 206) no resuelve todas las dudas sobre la definición exacta de "menores".

22. Debe aplaudirse la anunciada liberalización relativa a la libertad de circulación (art. 12). No obstante, ¿cuál es la situación real y legal en lo que se refiere a las visitas a Corea del Norte?

23. Como el Japón, la República de Corea se ha visto afectada por la llegada de los llamados "boat-people". En relación con el contenido del artículo 13 del Pacto, el Sr. Ando pregunta qué disposiciones legales afectan en Corea a la admisión o la expulsión de tales personas.

24. En relación con el párrafo 204 b) iii) del informe, solicita una aclaración sobre la posible restricción del derecho a comunicarse con el abogado defensor, recogido en el artículo 14 del Pacto.

25. También en relación con el artículo 14, y más específicamente el derecho de apelación, destaca la reserva emitida por el Gobierno (párr. 211 del informe) sobre la base de que "un juicio militar tramitado en virtud de la ley de excepciones es inapelable salvo en el caso de condena a muerte". ¿Por qué se deniega este derecho en el caso de una sentencia inferior?

26. Resulta obvio que la libertad de expresión sigue viéndose afectada de forma negativa en la República de Corea por el trauma real que supone la reciente historia del país, pero las enmiendas a la Ley de seguridad nacional anunciadas en el párrafo 247 del informe representan una señal prometedora. No obstante, la ley modificada, y en especial el párrafo 5 del artículo 7 parece tener un alcance que resulta todavía demasiado amplio e impreciso en algunas de sus disposiciones. Quizás sea necesario examinar de nuevo la cuestión. Tiene entendido que además de la aplicación de sanciones legales, se intenta en ocasiones imponer una renuncia a las creencias: esto entra sin lugar a dudas en conflicto con el artículo 18 del Pacto, y pide a la delegación de la República de Corea que exprese sus comentarios al respecto.

27. A la vez que aplaude el ingreso de la República de Corea en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), añade que, de acuerdo con la información recibida, se han hecho desaparecer algunas universidades privadas o sindicatos de enseñantes. Por tanto, la libertad de asociación es quizá otro de los asuntos que deben ser revisados.

28. En relación con el artículo 24 del Pacto y el párrafo 294 del informe, sobre la protección de los niños que trabajan, solicita más información sobre las medidas destinadas a impedir que se dé empleo a niños que se encuentren en una edad en la que debieran estar dedicados a la enseñanza obligatoria.

29. Por último, en relación con el artículo 25 y, más concretamente con la cuestión de las restricciones de los derechos políticos (párr. 308 del informe), pregunta por qué se prohíbe, entre otros, a los periodistas fundar partidos políticos o afiliarse a ellos.

30. El Sr. DIMITRIJEVIC, a la vez que da la bienvenida a la delegación de la República de Corea, comenta el carácter limitado de un informe que refleja los esfuerzos conscientes realizados en muchas partes del mundo para lograr un desarrollo social gradual y pacífico huyendo de todas las formas de autoritarismo, represión y limitación que derive de las circunstancias internacionales. Su principal objeción al informe sometido al Comité es que -quizá como consecuencia lógica de su reciente promulgación y debido a su importancia como base para la defensa de los derechos humanos, se dedica demasiado a la letra de las nuevas disposiciones constitucionales y legislativas y no contiene suficientes detalles sobre la situación real y las acciones específicas encaminadas a garantizar estos derechos y a eliminar las prácticas inadmisibles. Las cuestiones relativas a la situación de la prostitución (párr. 67) se encuentra en este caso.

31. La afirmación contenida en el párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución de la República de Corea, que se cita en el párrafo 3 del informe, en el sentido de que "no se desconocerán las libertades y los derechos de los ciudadanos por el hecho de que no estén enunciados en la Constitución", unido al párrafo 5 del informe, despierta un considerable interés legal. Pregunta si se han aplicado o invocado estas disposiciones no enunciadas con fuerza de ley nacional desde la aprobación de la actual Constitución, y si los más altos organismos judiciales del país han encontrado de hecho en la Constitución algunos derechos que participen del espíritu de los tiempos o del derecho natural.



32. En relación con el artículo 6 del informe y el derecho a la vida, toma nota por la lectura del párrafo 101 del informe, de las disposiciones con arreglo a las cuales se aplican las penas, incluida la pena de muerte en la República de Corea. A la vez que acoge con agrado la reciente reducción aplicada a los tipos de delitos en los que se aplica la pena de muerte, añade que, de una rápida lectura de la Ley de seguridad nacional, se desprende la conclusión de que el número de delitos en los que se aplica esta pena es todavía excesiva y pide detalles al respecto. De forma similar, y en relación con el párrafo 110 del informe, que trata de la cuestión del aborto, pregunta en qué circunstancias el aborto no es considerado como un delito.

33. En lo que se refiere al artículo 7, pide más información sobre si se aplica en todos los casos la no admisibilidad de las confesiones obtenidas mediante torturas y otros malos tratos.

34. No queda completamente claro en el informe cuáles son las limitaciones que se aplican a la prisión preventiva, pero al parecer dichas detenciones no deben sobrepasar los 30 días si se trata de delitos comunes, existiendo un período adicional de 20 días, al parecer para que se pueda proceder a más investigaciones, si se trata de acusaciones de delitos contemplados por la Ley de seguridad nacional. Comenta que este período adicional parece difícilmente justificable dada la experiencia, común a muchos países, del funcionamiento generalmente expeditivo de los organismos especiales de investigación que actúan en virtud de leyes de seguridad nacional.

35. En lo que se refiere a la República de Corea, el orador considera que el meollo de la cuestión de la garantía de los derechos reconocidos por el Pacto está relacionado con la situación actual de la Ley de seguridad nacional, aunque en su forma enmendada, "más suave". Los principales temas tratados, en especial en relación con los artículos 15 y 19 del Pacto, no se definen con precisión lo cual desde su punto de vista, les podría llevar a interpretaciones que no se ajusten a la letra y al espíritu del Pacto y que tendrían como resultado sanciones por actos criminales o incluso censurables que podrían no constituir un verdadero peligro para el Estado, así como la aplicación de restricciones innecesarias sobre la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, como señala el Sr. Ando, parece que se aplican en ocasiones ciertas presiones para lograr la retractación de las convicciones propias y otros hechos denunciabiles cuya finalidad es la de investigar la ideología de las personas. También parece que se practica la censura "previa" mediante la prohibición del recurso a ciertas formas de expresión.

36. En conclusión, y a pesar de la preocupación que ha expresado sobre las consecuencias generales de la Ley de seguridad nacional, reconoce que el completo informe presentado al Comité refleja una voluntad sincera de proporcionar información acerca de los verdaderos acontecimientos posteriores a un período durante el cual la propia existencia del país estuvo amenazada. Aplaudiva su presentación sistemática y afirma que, en su opinión, resultará de gran ayuda al Comité y a la delegación de la República de Corea en lo que espera constituya un diálogo constructivo.

37. El Sr. AGUILAR URBINA se suma a la felicitación por lo que considera un informe muy bien preparado, adecuado para iniciar un diálogo constructivo.

Al igual que los oradores anteriores, le surgen dudas y preguntas debidas concretamente a su relativa parquedad a la hora de describir la situación real de los derechos humanos en ese país.

38. A la vez que toma nota con interés, al igual que los demás oradores, de la afirmación según la cual el Pacto tiene la misma aplicabilidad que las leyes nacionales sin necesidad de que se promulgue una ley nacional especial (párr. 5), pregunta si en la práctica se han aplicado o invocado sus disposiciones ante los tribunales. Dejando de lado la citada afirmación, pregunta si una ley nacional puede derogar de alguna forma las normas del Pacto.

39. Estas preocupaciones, que se centran en la situación general del Pacto con respecto a la legislación de la República de Corea, le llevan también a tratar de buscar nuevas aclaraciones en relación con la Ley de seguridad nacional y otras leyes que afectan a ciertas disposiciones del Pacto. Señala que varias organizaciones no gubernamentales denuncian que la Ley de seguridad nacional es en realidad la verdadera constitución del país.

40. El párrafo 1 del artículo 11 de la Constitución prohíbe la discriminación por distintos motivos que parecen ser, sin embargo, menos numerosos que los recogidos en el Pacto (párr. 29 del informe). Agradecería disponer de más información al respecto. El párrafo 44 del informe dice que los extranjeros no pueden acceder a cargos públicos; el orador pregunta si esto se aplica a todos los cargos públicos sin excepción.

41. El párrafo 48 del informe declara que cualquier ley relativa a las penas que sea considerada inconstitucional será declarada nula e írrita. El Sr. Aguilar pregunta qué consecuencias acarrea esta disposición y si se aplica, por ejemplo, a la Ley de seguridad nacional cuyo alcance acaba de ser limitado. También quisiera saber si los fiscales dependen del poder ejecutivo o del judicial.

42. En relación con el artículo 3 sobre la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, señala que se desprende de la lectura del párrafo 67 del informe que la prostitución se considera delito en la República de Corea. El orador pregunta si el proxenetismo constituye también delito. El párrafo 69, que trata de la participación de la mujer en la sociedad, declara que el hombre y la mujer disfrutan de idénticos derechos políticos desde la creación del "Gobierno de Corea". Pregunta por qué se habla del "Gobierno de Corea" y no del "Estado coreano". Los párrafos 73 y 74 tratan de la posición de la mujer en relación con la profesión jurídica y el desempeño de cargos políticos: el orador pregunta si existe una ley que proteja la mujer de la discriminación en estos campos.

43. En relación con el artículo 4 del Pacto señala que, de acuerdo con la Constitución de Corea, el Presidente sólo tiene la potestad de aplicar medidas de emergencia mientras esté en peligro la supervivencia del Estado (párr. 92 del informe). Se trata sin lugar a dudas de un concepto muy vago, que podría interpretarse incluso en el sentido de que dichas medidas se mantengan hasta la reunificación de las dos Coreas. En virtud el párrafo 1 del artículo 76 de la Constitución, el Presidente puede asumir poderes

extraordinarios de mayor alcance que los que se recogen en el Pacto (párr. 90 del informe). ¿Gozarían de preeminencia en este caso las disposiciones del Pacto sobre la Constitución? Pregunta también si el Pacto sería aplicable directamente o únicamente a través de los tribunales, y hasta qué punto son compatibles con el Pacto el artículo 76 y el párrafo 2 del artículo 37 de la Constitución (que tratan de las restricciones admisibles sobre los derechos de los ciudadanos).

44. En lo que se refiere al artículo 6 del Pacto, que trata del derecho a la vida, observa que existe un gran número de delitos que conllevan la pena de muerte a la República de Corea. El párrafo 103 afirma que puede imponerse la pena de muerte en virtud del Código Penal y "otros reglamentos conexos", por lo que agradecería que se le dé más información sobre estos últimos. En este mismo párrafo se declara que la pena de muerte se limita a los casos que ponen en peligro "la existencia misma del Estado". Quisiera saber de qué crímenes concretos se trata. A este respecto, observa que existen hasta 50 delitos en los que se aplica la pena de muerte en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Le preocupa leer en el párrafo 109 del informe que la pena de muerte puede imponerse por robo. Además, no ha tenido éxito ninguna apelación contra condenas a muerte desde 1986 (párr. 108 del informe). Agradecerá que se le proporcione más información acerca de la afirmación contenida en el párrafo 113 de que "la detención de las personas condenadas a muerte tiene por objeto asegurar la ejecución de la pena de muerte".

45. El párrafo 125 del informe describe las posibles restricciones en los derechos de las personas que padezcan alguna de las tres enfermedades transmisibles que se citan. El orador quiere saber de qué forma se limitan los derechos de estas personas en la práctica.

46. En relación con el artículo 7 del Pacto, solicita más información sobre la decisión adoptada por la Corte Suprema en 1981 en virtud de la cual se rechaza una confesión obtenida por medio de la violencia (párr. 138 del informe). De acuerdo con la información que se le ha proporcionado, se han producido otros casos en los que se ha torturado o maltratado de alguna manera a los acusados con el fin de obtener una confesión.

47. En lo que se refiere al artículo 8 del Pacto, observa que el secuestro de una persona con el fin de sacarla del país constituye delito (párr. 141 del informe). Quiere saber si un simple secuestro representa también delito. El párrafo 146 establece que el derecho a la objeción de conciencia en relación con el servicio militar no puede considerarse como la libertad de conciencia amparada por la Constitución, y quisiera que se le dé más información al respecto.

48. En relación con el artículo 9 del Pacto, pregunta cuántos prisioneros políticos existen en la República de Corea; según la información que obra en su poder serán unos 1.300. El párrafo 1 del artículo 12 menciona unos "castigos preventivos" que pueden aplicarse en ciertos casos; el orador desea saber cuáles son estos castigos. Le preocupa comprobar que la persona sospechosa de haber cometido un delito de los contemplados en la Ley de seguridad nacional puede permanecer hasta 150 días detenida sin ser sometida a juicio. ¿Cómo se garantiza el bienestar de un detenido durante este período?

49. Respecto del artículo 10 del Pacto, el orador pregunta si existen distintas categorías de prisioneros y si se puede transferir a un prisionero de una categoría a otra, en función, quizás, de su grado de rehabilitación ideológica. Pregunta cuáles son las normas que rigen en materia de celdas de castigo.

50. Señala que el capítulo del informe dedicado al artículo 12 del Pacto (párrs. 192 y 193) no menciona la Ley de inscripción de residentes (párr. 227). Pregunta cuáles son las disposiciones de esta Ley y si está relacionada con la Ley de vigilancia por seguridad, según la cual cualquiera que sea sospechoso de haber cometido delitos contemplados por la Ley de seguridad nacional puede ser sometido a vigilancia durante un período de hasta dos años.

51. Respecto del artículo 14 del Pacto, señala que, de acuerdo con la Constitución de Corea, los acusados tienen derecho a un juicio inmediato (párr. 200). Sin embargo, una prisa excesiva puede resultar perjudicial para la adecuada preparación de la defensa. Pregunta cuáles son los efectos de esta disposición en la práctica. El párrafo 204 establece que el Estado asignará un abogado defensor al acusado si éste no puede obtener los servicios de uno que le represente. Si se diera esta circunstancia, pregunta si está previsto conceder un plazo más largo para que el abogado pueda preparar la defensa. Al parecer, el acusado no goza de un derecho automático a interrogar a los testigos: además, el acusado puede ser expulsado del tribunal bajo ciertas circunstancias, lo cual le impediría el careo con el testigo, aun cuando ello le estuviera permitido. El orador agradecería que se le proporcione información complementaria a este respecto y en relación con la imposición de la pena de muerte por parte de tribunales militares.

52. En relación con el artículo 18 del Pacto, que trata de la libertad de pensamiento, pregunta si alguien ha sido coaccionado en la República de Corea para retractarse de sus convicciones comunistas. Le preocupan las disposiciones recogidas en el párrafo 1 del artículo 2 de la Ley de seguridad nacional y se pregunta hasta qué punto son compatibles con las disposiciones del Pacto.

53. Por último, desearía obtener detalles adicionales acerca de las restricciones sobre la actividad política de las personas que han sido declaradas incompetentes (párr. 306). Se declara además que se prohibió a ciertos maestros y periodistas fundar o formar parte de un partido político y que los nuevos partidos no podrán crearse con la misma plataforma política que un partido que haya sido prohibido (párr. 308). Pregunta qué partidos han sido prohibidos y por qué motivos.

54. El Sr. EL SHAFEI aplaude la adhesión de la República de Corea a los pactos internacionales sobre derechos humanos y al Protocolo Facultativo. Se trata de un informe detallado, que reconoce la restricción de algunos derechos fundamentales en la República de Corea, pero que no proporciona una imagen completa. Según se admite, el país se ha visto seriamente afectado durante un largo período por la guerra fría y ha sufrido episodios de insurgencia, pero se ha enfrentado a ellos recurriendo a un uso excesivo y arbitrario de la fuerza y a los malos tratos, las torturas y los abusos de

autoridad en una medida que no se puede tolerar en un país democrático. Cabe esperar que la nueva actitud demostrada por el Gobierno de la República de Corea, como se desprende de su adhesión a los instrumentos internacionales de derechos humanos y de su presencia en el actual período de sesiones del Comité, significan que los excesos del pasado no volverán a repetirse.

55. La principal preocupación del Comité al estudiar el informe es la de determinar en qué forma la legislación de la República de Corea puede hacerse más compatible con las disposiciones del Pacto. Le gustaría oír algo más acerca de los acontecimientos ocurridos desde la presentación del informe que demostrara el compromiso del Gobierno en relación con estos cambios.

56. Pregunta si existe algún organismo estatal que sea responsable de la protección de los derechos humanos. Por otra parte, la delegación ha afirmado que el Pacto tiene la misma fuerza que la legislación nacional en la República de Corea. Pregunta qué ocurre en los casos de infracción de los derechos garantizados por el Pacto pero no reconocidos en la legislación nacional. Pregunta asimismo si existe alguna decisión de un tribunal que esté basada directamente en las disposiciones del Pacto. También desearía obtener más detalles acerca de las medidas adoptadas para garantizar la independencia de los jueces, en especial las normas que regulan su nombramiento, su permanencia en el cargo y su traslado.

57. Parece que la Corte Constitucional sólo puede determinar la constitucionalidad de una ley sobre la base de una decisión adoptada por un tribunal inferior: ¿podría estudiar también denuncias de inconstitucionalidad formuladas por particulares? Espera que el Gobierno adoptará las medidas necesarias en breve plazo para que varias de sus leyes, incluida la Ley de seguridad nacional, la Ley de vigilancia por seguridad, la Ley sobre regulación de conflictos laborales y la Ley sobre reuniones y manifestaciones sean más compatibles con el Pacto. Puede comprender que estas disposiciones hayan sido necesarias en el pasado, pero sin lugar a dudas ha llegado el momento de reformarlas o derogarlas.

58. El Sr. MAVROMMATIS dice que se ha experimentado un progreso considerable en la protección y promoción de los derechos humanos en la República de Corea desde el final de la guerra fría. No obstante, el Comité ha recibido denuncias sobre un gran número de violaciones, en particular en lo que se refiere a las relaciones entre los dos Estados coreanos, a los derechos de los presos políticos que cumplen sentencias largas, al derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia y a la libertad de expresión. Sin embargo, la determinación demostrada por el Gobierno para abordar estos problemas queda demostrada con su adhesión al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El informe presentado al Comité es adecuado pero, como otros muchos, hace afirmaciones genéricas sin respaldarlas con hechos específicos y no proporciona detalles sobre la situación actual en el país o sobre las dificultades encontradas en la aplicación de las disposiciones del Pacto. Por ejemplo, el informe afirma que la Constitución no entra en conflicto con el Pacto (párr. 6), pero no dice nada del resto de la legislación. El Pacto tiene la misma fuerza que la legislación nacional sin necesidad de promulgar una legislación nacional con este fin (párr. 5), pero se pregunta cómo se aplica este principio a las disposiciones del Pacto que no son ejecutivas de por sí.

59. El párrafo 1 del artículo 11 de la Constitución prohíbe la discriminación por ciertos motivos (párr. 29), pero no incluye criterios tan fundamentales como la raza, el color, el nacimiento y, en especial, las convicciones políticas, y considera que esta lista debería ampliarse.

60. Algunos otros puntos exigen más información. En relación con la punibilidad de los delitos, por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 1 del Código Penal parece contradecir el artículo 15 del Pacto. En relación con la imposición de la pena de muerte, es necesario una explicación acerca de los distintos grados de homicidio, no pudiendo considerarse que todos constituyen crímenes tan odiosos que merezcan la imposición de la pena de muerte. Se solicita una información más detallada en relación con los medios destinados a garantizar la independencia del poder judicial; pregunta el orador si los jueces son inamovibles, si sus emolumentos están garantizados, si tienen el derecho a renunciar a su cargo, si gozan de inmunidad en acciones civiles promovidas en relación con las funciones de su cargo, etc. Nunca se ponderará demasiado la importancia de disposiciones complicadas destinadas a garantizar la independencia del poder judicial. También resultaría útil disponer de una explicación acerca de la estructura jurídica nacional, la jurisdicción y la competencia de los distintos tribunales, sus relaciones jerárquicas y el derecho de apelación.

61. En relación con el artículo 25 del Pacto, la disposición sin aclarar de la Ley de partidos políticos que prohíbe a ciertos maestros y periodistas ser fundadores o miembros de un partido político parece contradecir no solamente el Pacto sino también el párrafo 2 del artículo 13 de la Constitución de la República de Corea. Es importante saber si es la Constitución o la Ley de partidos políticos la que prevalece.

62. Por último, el informe parece realizar una interpretación bastante restrictiva de las minorías religiosas y culturales. Resultaría interesante disponer de más información acerca de la distribución del país por religiones.

63. El Sr. MULLERSON aprecia los esfuerzos realizados en la República de Corea durante los últimos años para promover los derechos humanos. El informe inicial del Gobierno, que ha sido elaborado de acuerdo con las directrices del Comité, incluye mucha información de utilidad. Sin embargo, existen ciertas lagunas que deben ser mencionadas.

64. La declaración realizada en el informe acerca del derecho de los pueblos a la libre determinación es una cuestión que requiere una mayor información. El derecho a la libre determinación de los pueblos no incluye solamente el derecho a fundar estados independientes, sino también su derecho a la democracia y a escoger su propio sistema económico, social, político y cultural. Se pregunta cuál es el punto de vista de la República de Corea a este respecto. En relación con las referencias a Palestina y Sudáfrica contenidas en el informe, señala que la propia Corea es un país dividido y que los problemas de la libre determinación resultan de actualidad, habida cuenta del movimiento para la reunificación. Los medios de comunicación han publicado que las condiciones planteadas por Corea del Norte para la reunificación no son aceptables para el Gobierno de la República de Corea. Sería interesante conocer las condiciones del propio Gobierno.

65. En relación con el párrafo 29 del informe, se pregunta por qué el párrafo 1 del artículo 11 de la Constitución no menciona más que tres motivos de discriminación. No se menciona, por ejemplo, la religión o la opinión política, tal y como se recoge en el Pacto.

66. El párrafo 89 del informe, sobre medidas y órdenes de emergencia y la posible proclamación de la ley marcial, declara que el párrafo 2 del artículo 37 de la Constitución establece que las restricciones sobre la libertad de los ciudadanos no pueden atentar contra aspectos esenciales de los derechos fundamentales. No obstante, no define dichos aspectos esenciales. El párrafo 93 se refiere al ejercicio de las facultades de emergencia pero no define los poderes del Presidente ni menciona cuáles son sus límites.

67. El párrafo 149 del informe, sobre el artículo 9 del Pacto, describe los motivos bastante amplios que permiten una detención sin necesidad de orden judicial, por ejemplo en caso de violación de la Ley de seguridad nacional. La disposición a la que se refiere el párrafo 154 sobre la extensión del período de detención parece estar en contradicción con el principio de la presunción de inocencia.

68. En relación con el artículo 12 del Pacto y el derecho de los ciudadanos a la libertad de circulación, pregunta si existe alguna restricción en cuanto a las visitas a Corea del Norte por parte de ciudadanos de la República de Corea. También solicita más información en cuanto al mandato de los jueces. El orador cree que el Gobierno ha establecido mandatos que van más allá de los diez años habituales y señala que la titularidad vitalicia constituye una de las mejores garantías de un poder judicial independiente. En relación con los tribunales militares a los que se refiere el párrafo 211, pregunta qué categorías de casos están sometidos a dichos tribunales y cuál es el significado de la expresión "una ley de excepción".

69. Le preocupa la aplicación de la Ley de seguridad nacional. Aun cuando comprende la motivación de la Ley, considera que los cambios recientes en la situación general la han hecho menos necesaria. Al parecer, esta Ley no se aplica solamente contra los agentes de Corea del Norte sino también contra los críticos al Gobierno de la República de Corea, considerándose como motivo de encarcelamiento la simple posesión de literatura marxista.

70. El Sr. SADI afirma que la presentación del informe constituye una ruptura histórica con el pasado y el principio de una nueva era en la República de Corea. Le ha llamado particularmente la atención el que se haya incluido en la delegación al Director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

71. Tiene entendido que la preparación del informe ha dado lugar a una considerable publicidad en el interior del país. Esta publicidad ayudará a garantizar la aplicación del Pacto y agradecería que se le proporcione más información acerca de la atención que se le preste. Resulta importante que esta publicidad esté dirigida al público en general así como a los círculos jurídicos profesionales. Se pregunta si la situación ha cambiado de forma

perceptible desde que el Gobierno ratificó el Pacto. Una información detallada sobre el número de veces que éste se ha invocado permitiría al Comité establecer una relación con la evolución general de la situación de los derechos humanos en el país.

72. Varios miembros del Comité han expresado una preocupación general acerca de la aplicación de la Ley de seguridad nacional. Tiene entendido que su aplicación está sometida a revisión judicial pero se pregunta hasta qué punto son capaces los tribunales de dirigir su aplicación. Al parecer, la Corte Suprema no dispone de poderes para decidir sobre la legalidad de la ley marcial.

73. Espera que el Gobierno podrá retirar en breve sus reservas a los artículos 14 y 22 del Pacto. Se ha dicho que la tradición confuciana dominante en la República de Corea plantea dificultades al Gobierno para cumplir con algunas de sus aplicaciones en virtud de tratados, en especial en relación con la discriminación contra la mujer. Otros países con fuertes tradiciones religiosas se han encontrado con problemas similares y resultaría de utilidad una mayor información sobre la evolución de la situación y de la opinión pública en estos países.

74. La Sra. CHANET expresa su felicitación por la información completa y detallada acerca de la protección constitucional a los derechos civiles y políticos y las medidas para garantizar la aplicación del Pacto contenida en el informe, pero se lamenta por la ausencia de información sobre las dificultades cotidianas que se encuentran al promover el respeto de los derechos humanos.

75. Hace suyas las preguntas planteadas por los anteriores oradores acerca de la jerarquía de las disposiciones del Pacto y las de la Constitución. Acoge con agrado la retirada por parte del Gobierno de sus reservas al artículo 23 y espera que las emitidas en relación con los artículos 14 y 22 se retirarán también en breve. Señala que las reservas se han expresado en términos muy generales aunque, de acuerdo con el informe, se aplican a casos específicos; ciertos procedimientos en los juicios militares contra los que no cabe apelación salvo en casos de sentencia de muerte, y restricciones a los derechos sindicales de los funcionarios públicos. Debería ser posible recoger estas excepciones sin necesidad de emitir una reserva sobre la totalidad de los artículos.

76. Agradecería más información acerca de la estructura del poder judicial, con inclusión de la formación y selección de los jueces y las disposiciones para aplicarles medidas disciplinarias cuando se considere necesario.

77. El párrafo 18 del informe se refiere a los esfuerzos realizados por el Gobierno para que se comprenda plenamente el contenido del Pacto, en especial por parte de los funcionarios públicos. Agradecería la oradora más información sobre la forma en que el Gobierno tiene la intención de informar al público en general acerca de las disposiciones y el espíritu del Pacto.

78. Observa, tras la lectura del párrafo 48 sobre los recursos en caso de infracción de los derechos garantizados por la Constitución, que en los casos



en los que la Corte Constitucional falla en favor de una petición, es necesario tomar nuevas medidas acordes con la decisión. Pregunta cuántos casos de este tipo se han producido. También desearía recibir una explicación acerca de la expresión "selección razonable" que se utiliza en el párrafo 35.

79. En relación con el artículo 4 del Pacto, el párrafo 94 del informe dice que las restricciones sobre los derechos fundamentales en caso de emergencia no se refieren explícitamente a los derechos fundamentales que no pueden suspenderse según el artículo 4 del Pacto sino al aspecto "esencial" de las libertades o derechos a los que se refiere la Constitución. Pregunta si ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida o la prohibición de la tortura pueden suspenderse de hecho durante una emergencia. Tiene una pregunta similar en relación con el artículo 6 y la pena de muerte. Recuerda que el punto de vista del Comité es que la pena de muerte debe ser excepcional y aplicarse solamente en caso de delitos muy graves. El concepto de lo que constituye un delito grave puede diferir. Por tanto, desearía saber qué delitos están todavía sometidos a la pena de muerte desde la reforma de la Ley penal especial.

80. En relación con el artículo 9 del Pacto desearía más información acerca del papel del Organismo para la planificación de la seguridad nacional. Pregunta si ese Organismo dispone de poderes para detener e interrogar a los sospechosos. De acuerdo con la información procedente de las organizaciones no gubernamentales, se han producido casos en los que se ha retenido durante mucho tiempo a distintas personas sin someterlas a juicio en virtud de la Ley de seguridad nacional. Pregunta si existe en la ley alguna limitación en cuanto a la duración de este tipo de detención. Señala que, de acuerdo con el párrafo 247 del informe, en 1991 se ha aprobado una serie de enmiendas a la Ley de seguridad nacional con el fin de reducir su ámbito de aplicación, y se pregunta si esto podría plantear algún problema en relación con el artículo 15 del Pacto. Otra pregunta que surge respecto de la Ley de seguridad nacional es la relativa al artículo 4 y la definición de espionaje. El delito de quebrantamiento del secreto tal y como se recoge en la ley, resulta extremadamente vago. En la jurisprudencia, la Corte Suprema parece definir como secreta cualquier información disponible en materia política, social o económica. El revelar esta información puede ser considerado como un delito al que se puede aplicar la pena de muerte, lo cual podría plantear problemas en relación con los artículos 15, 18 y 19 del Pacto. En relación con el artículo 14, el informe declara que la confesión mediante tortura no se admitirá como prueba de cargo. Sin embargo, según Amnistía Internacional una persona está purgando una pena de cadena perpetua a causa de una confesión de este tipo. Pregunta si la delegación puede confirmar o negar este informe. Señala que en el párrafo 242 declara que uno de los propósitos de la Ley de radio y televisión es el de "contribuir a la formación de la opinión pública", y pide una explicación de esta frase. Se pregunta si siguen adelante los esfuerzos por promover el anticomunismo en la República de Corea a pesar de los cambios ocurridos en el mundo.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.